

CONGRESO NACIONAL

CAMARA DE SENADORES

PERIODO DE PRORROGA DE SESIONES ORDINARIAS DE 2006

ANEXO I AL ORDEN DEL DIA Nº 1335

Impreso el día 5 de diciembre de 2006

SUMARIO

COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE POBLACIÓN Y DESARROLLO HUMANO Y DE PRESUPUESTO
Y HACIENDA

Dictamen de minoría, en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Ley de Educación Nacional. (PE-424/06)

DICTAMEN DE COMISION
(EN MINORIA)

Honorable Senado:

Vuestras Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de Ley PE-424/06, LEY DE EDUCACION NACIONAL; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION
ARGENTINA,...

LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º: La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14

de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, respetando las autonomías provinciales establecidas en su artículo 5º y conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, incisos 18 y 19 de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se determinan.

ARTICULO 2º: El Estado Nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales.

ARTICULO 3º: El Estado federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de la administración y gobierno del Sistema Educativo en forma concurrente y concertada. Deberán garantizar a la población el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales, en los casos que así correspondan, asegurando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho. A tales fines, se dispondrá la creación, regulación y supervisión de los servicios necesarios, dando activa participación a la familia como institución natural y agente primario de la educación y formación, y a la comunidad a través de sus organizaciones sociales. La educación es pública, siendo la gestión de los establecimientos estatal o privada.

Título II

Principios Generales

Capítulo I

De la Política Educativa

ARTICULO 4º: El Estado federal establecerá los lineamientos de la política educativa garantizando el respeto de los siguientes criterios:

a) La educación es un bien público y es también un bien personal y social, garantizado por el Estado.

b) Todos, sin exclusión alguna, tienen derecho a una educación de calidad.

c) El Estado, para sostener y respaldar la libertad de enseñanza garantizada por la Constitución Nacional, mantiene y preserva un único sistema de educación pública con dos subsistemas: el de gestión estatal y el de gestión privada.

d) El rol principal y subsidiario del Estado debe conjugarse con el derecho natural e inalienable de los

padres a elegir para sus hijos una educación que responda a sus propias convicciones y creencias, sin discriminación alguna.

e) El principio de libertad de conciencia es un derecho irrenunciable de las familias, de los educadores y de los educandos.

f) El sistema educativo estará al servicio de un desarrollo pleno del hombre como persona en sus dimensiones física, intelectual y afectiva, sociocultural, espiritual y religiosa, sin descuidar el aspecto laboral y comunitario.

g) La educación constituye el fundamento indispensable de una sociedad más justa y solidaria que se sustenta en los valores de paz, libertad, igualdad, solidaridad y búsqueda del bien común.

h) La educación es para todos, y todos tienen derecho a iguales oportunidades.

i) Corresponde al Estado, sobre la base del principio de justicia distributiva, financiar de manera equitativa tanto la educación de gestión estatal como la de gestión privada.

j) La necesidad real de superar un sistema educativo fragmentado no debe justificar una intervención excesiva del Estado Nacional sobre las autonomías provinciales.

Se reconocen los siguientes derechos a los integrantes del sistema educativo:

1. A enseñar y aprender
2. A una distribución equitativa de los servicios educativos en todo el territorio de la república.
3. A la igualdad de oportunidades y a la eliminación de toda forma de discriminación.
4. A la integración de las personas con necesidades especiales, proveyendo las condiciones necesarias para impulsar el pleno desarrollo de sus capacidades, habilidades y una correcta inserción en el medio social.
5. De los alumnos, a que se respete su integridad, dignidad, libertad de conciencia, de expresión, y a recibir orientación vocacional.
6. De los padres, a ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación, con el derecho inalienable a decidir en los asuntos relativos a la educación

de sus hijos conforme sus propias convicciones filosóficas, éticas y religiosas.

7. De los padres, a asociarse y a participar en organizaciones de apoyo a la gestión educativa

8. De la comunidad, a participar a través de las organizaciones sociales.

9. De las comunidades indígenas, a recibir una educación bilingüe e intercultural que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales.

10. De los docentes, a una carrera profesional y a pertenecer a organizaciones sindicales legalmente reconocidas.

b) La educación pública y universalizada buscará:

1. Concebir la educación como un proceso permanente durante toda la vida.

2. Erradicar el analfabetismo en todas sus formas.

4. Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia.

5. Promover y organizar programas de apoyo que faciliten el acceso y permanencia de los alumnos en el sistema educativo.

6. Propiciar el enlace y coordinación de las acciones educativas formales, con la actividad no formal y las modalidades informales, ofrecidas o surgidas de los diversos sectores de la sociedad.

7. Promover las condiciones que estimulen el aprendizaje de conductas de convivencia social plural y participativa.

8. Promover el rol de la familia como institución fundamental dentro del sistema social y principal creadora de los lazos de solidaridad y compromiso con la comunidad en la búsqueda del bien común.

9. Formar al educando en valores que permitan su desarrollo integral en las dimensiones física, psíquica, social, cívica, cultural, ética, moral, espiritual y religiosa.

10. Transmitir conceptos que formen ciudadanos comprometidos con el respeto por la vida, la libertad, la igualdad, la diversidad, la búsqueda de la verdad, la paz, la justicia y el bien común, en un marco de responsabilidad y solidaridad.

11. Estimular y promover las innovaciones educativas, apoyando regímenes alternativos de educación, particularmente a los sistemas abiertos y a distancia.

12. Valorizar la cultura del trabajo intelectual y del esfuerzo individual y colectivo como uno de los elementos centrales para la realización del hombre y como eje vertebrador del proceso social y educativo.

13. Fomentar la buena gestión de las instituciones educativas en lo que atañe a sus aspectos pedagógicos, organizativos y financieros, mediante la capacitación profesional de sus directivos.

14. Fortalecer la identidad nacional, respetando las idiosincrasias locales, provinciales y regionales.

15. Consolidar de la democracia en su forma representativa republicana federal, y la afirmación de los valores republicanos.

16. Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales, de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

17. Desarrollar en los educandos una conciencia sobre nutrición e higiene, que genere hábitos de preservación de la salud en todas sus dimensiones.

18. Fomentar las actividades físicas y deportivas para posibilitar el desarrollo armónico e integral de las personas.

19. Brindar una formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.

20. Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la formación integral de una sexualidad responsable, respetando la vida desde la concepción y la dignidad humana.

21. Comprometer a los medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los contenidos y valores que transmiten.

22. Promover valores y actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas con la finalidad de prevenir las adicciones.

23. Promover la educación vial.

24. Brindar conocimientos para promover el cuidado y preservación del medio ambiente

CAPÍTULO II

SISTEMA EDUCATIVO FEDERAL

Conformación e Integración

ARTICULO 5º: El sistema educativo federal se integra por los servicios educativos prestados por las jurisdicciones nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por los servicios prestados por las entidades de gestión privada legalmente reconocidas.

La educación de gestión privada podrá ser prestada por la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos; por sociedades, asociaciones, fundaciones, empresas con personería jurídica, y personas físicas.

ARTICULO 6º: El sistema educativo debe ser flexible, articulado, abierto, prospectivo y equitativo. La equidad se debe expresar a través de una distribución de los servicios educativos teniendo como objetivo una calidad educativa equivalente para toda la población, sujeta a verificaciones sistemáticas y periódicas, y garantizada con un mínimo de recursos por el Estado federal de acuerdo con los parámetros de la ley 26.075 de financiamiento del sistema educativo.

TÍTULO III

ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO FEDERAL

Capítulo I

Descripción General

ARTICULO 7º: La estructura del sistema educativo será implementada en forma gradual y progresiva, y estará integrada por:

a) La Educación Inicial, constituida por el Jardín de Infantes para niños de 3 a 5 años de edad y por los Jardines Maternales a los que asisten niños de 45 días a 2 años de edad, establecidos por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las jurisdicciones garantizarán la oferta del Jardín de Infantes para niños de 3 a 5 años.

La asistencia al Jardín de Infantes será obligatoria para todos los niños desde los 5 años de edad.

Los Jardines Maternales estarán sujetos a la habilitación y supervisión de las autoridades de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

b) La Educación Primaria, es obligatoria para todos los niños a partir de los 6 años de edad. Durará 6 años, tendrá una jornada extendida, con un mínimo semanal de 20 horas reloj, e incluirá la enseñanza de una segunda lengua y de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.

c) La Educación Secundaria, es obligatoria y durará seis años, divididos en dos ciclos de tres años cada uno, y tendrá una jornada extendida, con un mínimo semanal de 25 horas reloj e incluirá la enseñanza de una segunda lengua y de las nuevas tecnologías informáticas y de la comunicación.

El primer ciclo corresponde al Nivel Secundario Básico Común y el segundo ciclo abarcará modalidades y/o recorridos pedagógicos alternativos que generen competencias para desarrollarse en el ámbito académico y laboral.

d) La Educación Superior, profesional y académica de grado se rige por las disposiciones de la Ley de Educación Superior n° 24.521.

e) La Educación de postgrado, se rige por las disposiciones de la Ley de Educación Superior n° 24.521.

ARTICULO 8º: El sistema educativo comprende también otros regímenes y modalidades especiales que tienen por finalidad atender demandas que no son satisfechas por la estructura común, y que exigen ofertas específicas diferenciadas en función de las particularidades o necesidades del educando o del medio.

Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordarán, en el seno del Consejo Federal de Educación, ofertas educativas de menor duración y con preparación ocupacional específica para quienes hayan terminado el nivel primario. Ello no impedirá a los educandos proseguir estudios en los siguientes niveles del sistema.

ARTICULO 9º: Los ciclos, niveles y regímenes especiales que integren la estructura del sistema educativo deberán articularse, a fin de profundizar los objetivos, facilitar el pasaje y continuidad entre ellos, y asegurar la movilidad horizontal y vertical de los alumnos.

CAPÍTULO II

Nivel Inicial

ARTICULO 10º: Los objetivos de la educación inicial son:

a) Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación creativa, las formas de expresión personal y de comunicación verbal y gráfica.

b) Favorecer el proceso de maduración del niño en materia sensorio motor, la manifestación lúdica, la iniciación deportiva, artística, el crecimiento socio-afectivo, los valores éticos y religiosos.

c) Estimular hábitos de integración social, de convivencia grupal, de solidaridad y cooperación.

d) Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.

ARTICULO 11º: Todos los establecimientos que presten el servicio educativo en este nivel -de gestión estatal o privada-, serán autorizados y supervisados por las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto será extensivo a las actividades pedagógicas dirigidas a niños menores de 3 años de edad, las que deberán estar a cargo de personal docente especializado.

CAPÍTULO III

Nivel Primario

ARTÍCULO 12: Los objetivos de la educación primaria son:

a) Proporcionar una formación básica común a todos los niños y adolescentes del país garantizando su acceso y permanencia en el sistema, y la equivalencia en la calidad de los aprendizajes.

b) Desarrollar el conocimiento con sentido crítico, creativo e interdisciplinario, estimulando la permanente búsqueda de la verdad en un marco del respeto por la opinión y aportes del otro.

c) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la infancia en todas sus dimensiones.

d) Lograr la adquisición y el dominio de la comunicación verbal y escrita y el aprendizaje en áreas esenciales del conocimiento, en especial lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana.

e) Incorporar el trabajo intelectual como metodología pedagógica.

f) Adquirir hábitos de nutrición e higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones.

g) Utilizar la educación física y el deporte para desarrollar íntegramente su dimensión psicofísica.

h) Inculcar los principios, derechos, deberes y garantías respecto de las personas y sus actos contenidas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a fin de brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de la vida desde la concepción, la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, la diversidad, justicia y bien común.

j) Desarrollar la iniciativa individual, el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación.

k) Fomentar el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.

l) Promover el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender.

CAPÍTULO IV

Nivel Secundario

ARTÍCULO 13: Los objetivos de la educación secundaria son:

a) Inculcar los principios, derechos, deberes y garantías respecto de las personas y sus actos contenidas en la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales a fin de brindar una formación ética que habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de la vida desde la concepción, la libertad, la paz, la solidaridad, la igualdad, la diversidad, justicia y bien común.

b) Inculcar el conocimiento de los principios, derechos, deberes y garantías de las personas y el funcionamiento de las instituciones, estimulando el desarrollo del compromiso cívico.

c) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y de situarse como participantes activos en un mundo en permanente cambio.

d) Desarrollar y consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de

trabajo individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida.

e) Desarrollar las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación.

f) Desarrollar el conocimiento con sentido crítico, creativo e interdisciplinario, estimulando la permanente búsqueda de la verdad en un marco de respeto por la opinión y aportes del otro.

g) Desarrollar procesos de orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los estudiantes.

h) Profundizar el conocimiento teórico del conjunto de saberes agrupados de acuerdo con los recorridos pedagógicos específicos, generando competencias que permitan desarrollarse en el ámbito académico y laboral.

i) Conocer los principios de la iniciativa económica y los principios de la organización empresarial, para poder desenvolverse en las actividades productivas.

j) Vincular a los estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología.

k) Favorecer la autonomía intelectual y el desarrollo de las capacidades necesarias para la prosecución de estudios ulteriores y/o su inserción en el ámbito laboral.

l) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos.

m) Propiciar la práctica de la educación física y del deporte, para posibilitar el desarrollo armónico e integral del joven y favorecer la preservación de su salud psicofísica.

n) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las distintas manifestaciones de la cultura y las lenguas extranjeras.

o) Consolidar hábitos de nutrición e higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones.

p) Articular el nivel en forma horizontal, a fin de facilitar la opción de cambio de modalidad del alumno, y en forma vertical con el nivel primario y el nivel superior.

ARTÍCULO 14: La educación técnica se impartirá en unidades escolares con competencia para enseñar este tipo de modalidad y se regirá por las disposiciones de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional y por la presente ley.

CAPÍTULO V

Educación Superior

ARTÍCULO 15: La educación superior se rige por las disposiciones de la ley 24.521 de Educación Superior y por la presente ley.

CAPÍTULO VI

Regímenes y Modalidades Especiales

1.- Educación Especial

ARTÍCULO 16: Los regímenes de educación especial se orientan a satisfacer las necesidades pedagógicas de aquellos educandos que requieran una formación diferencial. Las personas con discapacidad, permanente o temporaria y aquéllas dotadas con talentos superiores, tienen derecho a recibir una enseñanza que permita el pleno desarrollo de sus capacidades, habilidades y una correcta inserción en el medio social.

Entiéndase a la discapacidad, como la pérdida de la capacidad funcional secundaria, con déficit en un órgano o función que trae como consecuencia una minusvalía en el funcionamiento intelectual y/o físico y en la capacidad para afrontar las demandas cotidianas del entorno social.

Entiéndase por talentos superiores, aquellos que se producen por una maduración temprana en todos o varios aspectos del desarrollo.

ARTÍCULO 17: En aquellos casos en los que las capacidades de la persona sean superiores o inferiores a la media, o necesiten adaptaciones para acceder a los conocimientos, se garantizará el derecho a aprender a través de las unidades escolares, según la necesidad educativa especial.

ARTÍCULO 18: El cumplimiento de la obligatoriedad indicada en el Artículo 7º, incisos a, b y c, rige también para los niños y adolescentes con necesidades educativas especiales.

ARTÍCULO 19: Las jurisdicciones desarrollarán programas para que las unidades escolares comunes detecten en forma temprana los casos de niños con

necesidades educativas especiales y apliquen incorporación temprana, adaptaciones o enriquecimiento curricular, aceleración o permanencia del alumno en los casos que sea necesario y el seguimiento de éstos en conjunto con sus familias, con el objeto de lograr el desarrollo pleno de sus capacidades, habilidades y una correcta inserción en el medio social.

ARTÍCULO 20: Los objetivos de la Educación Especial son:

a. Garantizar el acceso al conocimiento de todos los alumnos desde el momento en que se detecta su necesidad pedagógica especial.

b. Brindar una formación individualizada e integradora, con una pedagogía centrada en el educando, capaz de satisfacer esas necesidades y orientada al desarrollo integral de la persona.

c. Propender a que las personas con necesidades educativas especiales no sean discriminadas y procurar, en la medida de sus posibilidades, su adaptación e integración a las unidades escolares comunes.

d. Contar con personal especializado que trabaje en equipo con los docentes de la escuela común para detectar oportunamente la necesidad pedagógica de aquellos educandos que puedan precisar Educación Especial.

e. Las unidades escolares comunes se articularán con las unidades escolares especiales dentro de los programas de integración escolar o escuelas inclusivas de cada jurisdicción, contarán con equipos interdisciplinarios especializados y adoptarán criterios particulares de currícula, organización escolar y material didáctico.

f. La educación especial brindará atención educativa a todas aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común.

ARTICULO 21: El Estado proveerá los apoyos necesarios que garanticen a las personas con necesidades educativas especiales, ejercer en plenitud el derecho a aprender.

Todas las escuelas del sistema educativo deben ser accesibles en los aspectos de físicos, de transporte, de la comunicación y de la currícula.

2. Educación Permanente de Jóvenes y Adultosn

ARTÍCULO 22.- La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista por la presente ley, a quienes no hayan completado su educación en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar posibilidades de hacerlo a lo largo de toda la vida.

ARTÍCULO 23.- Los programas y acciones de educación para jóvenes y adultos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y de las distintas jurisdicciones se articularán con acciones de otros Ministerios, particularmente los de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Desarrollo Social, de Justicia y Derechos Humanos y de Salud, y se vincularán con el mundo de la producción y del trabajo. A tal fin, en el marco del Consejo Federal de Educación se acordarán los mecanismos de participación de los sectores involucrados, a nivel nacional, regional y local. Asimismo, el Estado garantiza el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de educación permanente y las posibilidades de acceso a las mismas.

ARTÍCULO 24.- La organización curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos responderá a los siguientes objetivos y criterios:

a) Brindar una formación básica que permita adquirir conocimientos y desarrollar las capacidades de expresión, comunicación, relación interpersonal y de construcción del conocimiento, atendiendo las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales de la población destinataria.

b) Desarrollar la capacidad de participación en la vida social, cultural, política y económica y hacer efectivo su derecho a la ciudadanía democrática.

c) Mejorar su formación profesional y/o adquirir una preparación que facilite su inserción laboral.

d) Promover la inclusión de los/as adultos/as mayores y de las personas con discapacidades, temporales o permanentes.

e) Diseñar una estructura curricular basada en criterios de flexibilidad y apertura.

f) Otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la experiencia laboral.

g) Implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y acompañen la movilidad de los/as participantes.

h) Desarrollar acciones educativas presenciales y/o a distancia, particularmente en zonas rurales o aisladas, asegurando la calidad y la igualdad de sus resultados.

i) Promover la participación de los/as docentes y estudiantes en el desarrollo del proyecto educativo, así como la vinculación con la comunidad local y con los sectores laborales o sociales de pertenencia de los/as estudiantes.

j) Promover el acceso al conocimiento y manejo de nuevas tecnologías.

k) Impulsar el desarrollo integral y la calificación laboral de aquellas personas que no cumplieron con la regularidad de la educación obligatoria, o que habiendo cumplido con ésta deseen adquirir o mejorar su preparación a los efectos de proseguir estudios en los otros niveles del sistema, dentro o fuera de este régimen especial.

m) Proveer educación formal a quienes no la posean, mediante regímenes de horarios y asistencia que permitan el cumplimiento de las obligaciones laborales del educando.

n) Facilitar el acceso a los servicios educativos en los distintos niveles del sistema a las personas que se encuentren privadas de libertad en establecimientos carcelarios, en cuyo caso estos servicios serán supervisados por las autoridades educativas correspondientes.

ARTICULO 25: En todos los casos, los regímenes especiales alternativos asegurarán que el proceso enseñanza- aprendizaje tenga un valor formativo equivalente al logrado en las etapas del sistema formal.

3. Educación en Contextos de Privación de Libertad

ARTÍCULO 26.- La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.

ARTÍCULO 27.- Son objetivos de esta modalidad:

a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas privadas de libertad dentro

de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las condiciones de detención lo permitieran.

b) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes.

c) Ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las personas privadas de libertad.

d) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior y un sistema gratuito de educación a distancia.

e) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del acceso al sistema educativo y a la vida cultural.

f) Asegurar alternativas de educación no formal y apoyar las iniciativas educativas que formulen las personas privadas de libertad.

g) Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y deportiva.

ARTÍCULO 28.- Para asegurar la educación de todas las personas privadas de libertad el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología acordará y coordinará acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las autoridades nacionales y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con institutos de educación superior y con universidades.

ARTÍCULO 29.- Los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial destinada a los niños de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años de edad, nacidos y/o criados en estos contextos, a través de jardines maternos o de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias.

4.- Régimen Especial para

Niñas, Niños y Adolescentes Institucionalizados

ARTICULO 30: Las autoridades educativas supervisarán las acciones educativas impartidas a niños y adolescentes que se encuentren internados transitoriamente por circunstancias objetivas de carácter diverso. Estas acciones estarán a cargo de personal docente y se corresponderán con los contenidos curriculares fijados para cada ciclo y nivel del sistema educativo.

ARTÍCULO 31: En todos los casos en que sea posible, se instrumentarán las medidas necesarias para que estos educandos en situaciones atípicas, cursen sus estudios en las unidades escolares comunes del sistema, con el apoyo de personal docente especializado.

La jurisdicción correspondiente asegurará que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un valor formativo equivalente al logrado en las etapas del sistema formal.

ARTÍCULO 32- Todos los niños y adolescentes que se encuentren privados de libertad en instituciones de régimen cerrado según lo establecido por el artículo 19 de la Ley N° 26.061, tendrán derecho al acceso, permanencia y tránsito en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las formas de implementación de este derecho responderán a criterios de flexibilidad y calidad que aseguren resultados equivalentes a los de la educación común.

Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos responsables de las instituciones en que se encuentran niñas, niños y/o adolescentes privados de libertad, adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley.

5. Educación Domiciliaria y Hospitalaria

ARTÍCULO 33.- La educación domiciliaria y hospitalaria es la modalidad del sistema educativo en los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, destinada a garantizar el derecho a la educación de los alumnos que, por razones de enfermedad, se vean imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en los niveles de la educación obligatoria por períodos de treinta (30) días corridos o más.

ARTÍCULO 34.- El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades a los alumnos, permitiendo la continuidad de sus estudios y su reinserción en el sistema común, cuando ello sea posible.

6.- Educación Artística

ARTÍCULO 35: Los contenidos de la educación artística que se correspondan con los de los ciclos y niveles en los que se basa la estructura del sistema educativo, deberán ser equivalentes, diferenciándose únicamente por las disciplinas artísticas y pedagógicas.

ARTÍCULO 36: La docencia de las materias artísticas en el nivel inicial y primario tendrán en cuenta las particularidades de la formación en este régimen especial. Estará a cargo de maestros egresados de las escuelas de arte, que acrediten el cumplimiento del nivel secundario completo.

Todos los alumnos, en el transcurso de su escolaridad obligatoria, tendrán oportunidad de desarrollar su sensibilidad y su capacidad creativa en, al menos, DOS (2) disciplinas artísticas.

En la Educación Secundaria, la modalidad artística ofrecerá una formación específica en Música, Danza, Artes Visuales, Plástica, Teatro, y otras que pudieran conformarse, admitiendo en cada caso diferentes especializaciones. La formación específica brindada en las escuelas especializadas en artes, podrá continuarse en establecimientos de nivel superior de la misma modalidad.

7.- Educación a Distancia

ARTICULO 37: La Educación a Distancia es la opción pedagógica y didáctica donde la relación docente y alumno se encuentra separada en el tiempo y/o en el espacio, durante todo, o gran parte del proceso educativo, y que utiliza recursos tecnológicos apropiados a esta modalidad.

ARTICULO 38: Quedan comprendidos en la Educación a Distancia, los estudios de educación semipresencial, educación asistida, educación abierta, y cualquiera otra que reúna las características indicadas en el artículo precedente.

ARTÍCULO 39: Las autoridades educativas promoverán la organización y funcionamiento de la Educación a Distancia y otros Regímenes Especiales alternativos dirigidos a sectores de la población que no concurran a Establecimientos Presenciales.

ARTÍCULO 40: La jurisdicción correspondiente asegurará que el proceso de enseñanza-aprendizaje tenga un valor formativo equivalente al correspondiente a los niveles del sistema formal, para lo cual determinará los requisitos del régimen no presencial, y la periodicidad y condiciones de los exámenes de evaluación.

8. Educación Rural

ARTÍCULO 41.- La Educación Rural es la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a garantizar el cumplimiento

de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas que son definidas como rurales según criterios consensuados entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las Provincias, en el marco del Consejo Federal de Educación.

ARTÍCULO 42.- Son objetivos de la Educación Rural:

a) Promover la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna.

b) Garantizar el acceso a los saberes postulados para el conjunto del sistema, a través de propuestas pedagógicas que fortalezcan el vínculo de los educandos con su núcleo familiar, con las identidades culturales, y las actividades productivas locales, garantizando la necesaria coordinación y articulación del sistema dentro de cada provincia y entre las diferentes jurisdicciones.

c) Permitir modelos de organización escolar adecuados a cada contexto, tales como agrupamientos de instituciones, salas plurigrados y grupos multiedad, instituciones que abarquen varios niveles en una misma unidad educativa, escuelas de alternancia, escuelas itinerantes u otras, que garanticen el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y la continuidad de los estudios en los diferentes ciclos, niveles y modalidades del sistema educativo, atendiendo asimismo las necesidades educativas de la población rural migrante.

ARTÍCULO 43.- El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, es responsable de garantizar que los servicios educativos brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad equivalente a los urbanos. Los criterios generales que deben orientar dichas medidas son:

a) instrumentar programas especiales de becas que garanticen la igualdad de posibilidades.

b) asegurar el funcionamiento de los servicios asistenciales que resulten necesarios a la comunidad.

c) proveer los recursos pedagógicos y materiales necesarios para la escolarización de los alumnos y estudiantes del medio rural.

d) integrar redes intersectoriales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y agencias de extensión, para expandir y garantizar las oportunidades y posibilidades educativas de los alumnos.

e) organizar servicios de educación no formal que contribuyan a la capacitación laboral y la promoción cultural de la población rural, sin discriminación alguna.

9. Educación Intercultural Bilingüe

ARTÍCULO 44: La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de las comunidades indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural, y a mejorar su calidad de vida.

ARTÍCULO 45: El Estado federal promoverá programas -en coordinación con las jurisdicciones correspondientes- de rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumento de integración.

TÍTULO IV

Educación No Formal

ARTÍCULO 46: La educación no formal en su aspecto pedagógico implica la organización de prácticas diversas, referidas al empleo del tiempo libre, la recreación y los cursos o talleres que persiguen objetivos con alto grado de focalización, apuntando a la actualización, o al desarrollo de aspectos personales. Los contenidos poseen independencia temática, y no requieren de una secuenciación o correlatividad, siendo de libre elección por parte de los destinatarios, según sus necesidades o preferencias.

ARTÍCULO 47: Las autoridades educativas:

a) Promoverán la oferta de servicios de educación no formal, vinculados, o no, con los servicios de educación formal, facilitando información a la comunidad.

b) Propiciarán acciones de capacitación docente para esta área.

c) Promoverán convenios con asociaciones intermedias para realizar programas conjuntos de educación no formal que respondan a las demandas de los sectores que representan.

d) Posibilitarán la organización de centros educativos, culturales y recreativos para jóvenes que estarán a cargo de personal especializado, otorgarán las certificaciones correspondientes, y se articularán con el nivel secundario.

e) Facilitarán el uso de la infraestructura edilicia y del equipamiento de las instituciones públicas y de los establecimientos del sistema educativo formal, para la educación no formal.

f) Supervisarán los servicios de educación no formal organizados por instituciones de gestión privada que cuenten con reconocimiento oficial.

TÍTULO V

De la Educación Pública de Gestión Privada

ARTÍCULO 48: Los servicios educativos de gestión privada estarán sujetos al reconocimiento previo y a la supervisión de las autoridades educativas oficiales. Tendrán derecho a prestar estos servicios los siguientes agentes:

1. La Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos;
2. Las sociedades, asociaciones, fundaciones, empresas con personería jurídica y las personas físicas.

Dentro del sistema federal de educación y con sujeción a las normas reglamentarias, los agentes tienen derecho a crear y organizar unidades escolares; nombrar y promover a su personal directivo, docente, administrativo y auxiliar; disponer sobre la utilización del edificio escolar; formular planes y programas de estudio; aprobar el proyecto educativo institucional de acuerdo con su ideario; participar en el planeamiento educativo; matricular, evaluar y otorgar certificados y títulos con validez nacional; recibir aportes financieros estatales.

De la misma forma tienen la obligación de responder a los lineamientos generales de la política educativa federal y jurisdiccional; ofrecer servicios educativos que respondan a necesidades de la comunidad, con posibilidad de abrirse solidariamente a cualquier otro tipo de servicio recreativo, cultural o asistencial; y brindar toda la información necesaria para la supervisión pedagógica por parte del Estado. Deberán además informar en tiempo y forma sobre la aplicación de los aportes económicos recibidos, facilitando a las autoridades jurisdiccionales el acceso a los registros contables, financieros y laborales de las unidades educativas.

ARTÍCULO 49: El aporte financiero estatal a los establecimientos educativos de gestión privada se basará en criterios objetivos de justicia distributiva en el marco de la justicia social, teniendo en cuenta -entre otros aspectos- la

función social que la unidad escolar cumpla en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, y la cuota que se percibe.

ARTÍCULO 50: Los docentes de las instituciones educativas de gestión privada reconocidas, tendrán derecho a una remuneración mínima igual a la de los docentes de instituciones de gestión estatal, y deberán acreditar títulos reconocidos por la legislación vigente en cada jurisdicción.

TÍTULO VI

Financiamiento Público de la Gratuidad

a. Disposiciones generales

ARTÍCULO 51: El Estado federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están obligados a garantizar el principio de gratuidad de la educación pública, mediante la asignación de recursos en los respectivos presupuestos públicos, de conformidad con los siguientes criterios:

a) A los efectos del artículo 5 de la Constitución Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán cumplir con su obligación de atender la educación, asignando a dicho objetivo como mínimo el 20% (VEINTE POR CIENTO) de sus respectivos presupuestos.

b) El Estado federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecerán un sistema de becas, destinadas a aquellos alumnos en condiciones socioeconómicas desfavorables, que una vez finalizados los estudios secundarios, opten por cursar estudios o ciclos superiores.

c) En los casos de transferencias adicionales a las establecidas en la Ley de Financiamiento Educativo, la Nación se compromete a realizarlas de modo equitativo entre las distintas jurisdicciones, de modo de obtener un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio argentino.

ARTÍCULO 52: Con el objetivo de garantizar a los niños y adolescentes de entre cinco y dieciocho años de edad el cumplimiento de la obligatoriedad que determina la presente ley, el Estado federal implementará una asignación por alumno que se otorgará cuando sus padres o representantes legales lo soliciten. Esta asignación consistirá en un ingreso mensual que cubrirá las necesidades elementales para mantener la condición de alumno regular de los niños y adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos que cursen la escolaridad obligatoria.

El ingreso será percibido por los padres o representantes legales, contra la presentación de la libreta escolar que certifique la asistencia regular de los alumnos a clase. Esta condición será imprescindible para su percepción, quedando el ciudadano que la viola sometido a las sanciones impuestas por la reglamentación de esta ley.

En todos los casos los organismos públicos y privados coordinarán sus esfuerzos, a fin de lograr eficacia en la aplicación de los recursos, y se adoptarán acciones específicas para los alumnos que abandonan sus estudios y para los repitentes.

b. Emergencia educativa

ARTICULO 53: En el caso en que una provincia, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no colabore al logro de un grado equivalente de desarrollo educativo e igualdad de oportunidades en su territorio, o esté en riesgo el derecho a la educación de los alumnos que cursan los niveles y ciclos de carácter obligatorio, conforme a lo establecido por la presente ley, intervendrá el Poder Ejecutivo Nacional, previa declaración de la emergencia educativa, contribuyendo a reestablecer y equiparar la prestación de los servicios educativos en la jurisdicción afectada. Esta decisión, y las medidas que se instrumenten, deberán contar con el acuerdo de la jurisdicción involucrada y del Consejo Federal de Educación, y serán dictadas por ley del Congreso de la Nación. Dentro de los sesenta días de haberse dictado la emergencia, el Poder Ejecutivo Nacional enviará al Congreso un informe detallado sobre su actuación al respecto.

La jurisdicción que no cumpla con los parámetros mínimos de inversión educativa, verá afectada su participación en la distribución secundaria de impuestos coparticipables, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 2, tercer párrafo, de la Constitución Nacional.

TÍTULO VII

Unidad Escolar y Comunidad Educativa

ARTICULO 54: La unidad escolar, como estructura pedagógica formal y como ámbito físico y social, establecerá vínculos con las diferentes organizaciones de su entorno y pondrá a disposición la infraestructura edilicia para el desarrollo de actividades extraescolares y comunitarias, preservando lo atinente al destino y funciones específicas del establecimiento.

ARTÍCULO 55: La comunidad educativa estará integrada por directivos, docentes, padres, alumnos, ex-alumnos, personal administrativo y auxiliar de la docencia y las organizaciones representativas de su ámbito geográfico. Participarán en la elaboración del proyecto institucional específico de cada unidad escolar y según su propia opción y de acuerdo con él, en la organización y gestión del establecimiento, y en todo aquello que haga al apoyo y mejoramiento de la calidad de la educación de gestión estatal, sin afectar el ejercicio de las responsabilidades directivas y docentes.

TÍTULO VIII

Derechos y Deberes de los Miembros de la Comunidad Educativa

CAPÍTULO I

De los Educandos

ARTÍCULO 56: Los educandos tienen derecho a:

a) Recibir una educación integral e igualitaria en términos de calidad y cantidad, que posibilite el desarrollo de sus conocimientos, habilidades y su sentido de la responsabilidad y la solidaridad social.

b) Ser respetados en su libertad de conciencia, sus convicciones éticas, morales, religiosas y políticas.

c) Ser protegidos contra toda agresión física, psicológica o moral.

d) Ser evaluados en sus desempeños y logros, conforme a criterios rigurosa y científicamente fundados, en todos los niveles, ciclos y regímenes especiales del sistema e informados personalmente junto con sus tutores, manteniendo la reserva y privacidad de los resultados.

e) Recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite proseguir estudios superiores, su inserción en el mundo laboral y el desarrollo de su proyecto de vida.

f) Integrar centros, asociaciones y clubes de estudiantes u otras organizaciones comunitarias. En los establecimientos públicos de gestión estatal y gestión privada, el ejercicio de este derecho estará sujeto al proyecto institucional de la unidad escolar.

g) Desarrollar sus aprendizajes en edificios que respondan a normas de seguridad y salubridad, y que cuenten con instalaciones y equipamiento que aseguren la calidad y eficacia del servicio educativo.

h) Estar amparados por un seguro de responsabilidad civil durante su permanencia en el establecimiento escolar; y fuera de él cuando se encuentren realizando actividades programadas por las autoridades educativas correspondientes.

i) Ser destinatarios de programas de salud, chequeos médicos gratuitos, seguimiento sanitario y alimentario en el ámbito escolar.

j) Acceder a la asignación general por alumno en los casos del artículo 52 de la presente ley.

k) Cambiar de jurisdicción educativa con la sola presentación de un certificado de estudios emitido por la autoridad competente.

l) Cursar un mínimo de 180 días clases por año.

ARTÍCULO 57: Son deberes de los educandos:

a) Estudiar y esforzarse por conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades y posibilidades.

b) Asistir a clase regularmente y con puntualidad.

c) Participar en las actividades formativas y complementarias.

d) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones y la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.

e) Contribuir a la sana convivencia escolar y a construir un adecuado clima de estudio en la institución, cumpliendo las orientaciones de las autoridades educativas.

f) Respetar a las autoridades educativas, docentes y no docentes

g) Respetar el proyecto educativo institucional, las normas de convivencia y disciplina de la unidad escolar.

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones, equipamiento y materiales didácticos del establecimiento educativo.

CAPÍTULO II

De los Padres y Representantes Legales

ARTÍCULO 58: Los padres y/o representantes legales de los alumnos tienen derecho a:

a) Ser reconocidos como agentes naturales y primarios de la educación, con el derecho inalienable a decidir en los asuntos relativos a la educación de sus hijos, o representados/as, conforme sus propias convicciones éticas morales y religiosas.

b) Participar en las actividades de los establecimientos educativos en forma individual o a través de los órganos colegiados representativos de la comunidad educativa.

c) Ser informados en forma periódica acerca de la evolución y evaluación del proceso educativo de sus hijos o representados.

ARTÍCULO 59: Los padres y/o representantes legales de los educandos deberán cumplir los siguientes deberes:

a) Hacer cumplir a sus hijos o representados/as, con la educación obligatoria que establece la presente ley.

b) En caso de percibir la asignación por alumno, deberán presentar la libreta escolar que certifique la asistencia a clase de sus hijos, o representados/as, de conformidad con lo establecido en el artículo 52 de la presente ley.

c) Seguir y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, o representados/as.

d) Respetar y hacer respetar a sus hijos o representados/as, el proyecto educativo institucional, y las normas de convivencia y disciplina de la unidad escolar.

CAPÍTULO III

De los Docentes

ARTÍCULO 60: Sin perjuicio de los derechos laborales reconocidos por la legislación especial, los docentes de gestión estatal y privada tendrán derecho a:

a) A la capacitación y actualización permanente para adaptarse a los cambios curriculares requeridos.

b) Desempeñarse en cualquier jurisdicción, mediante la acreditación de los títulos habilitantes, de conformidad a la legislación vigente.

c) A la libertad de enseñanza, en el marco de las normas pedagógicas y curriculares establecidas por la autoridad educativa.

d) A ingresar en el sistema educativo de gestión estatal, mediante un régimen de concursos que garantice la idoneidad profesional y el respeto por las incumbencias profesionales, y ascender en la carrera docente a partir de sus propios méritos y su actualización profesional.

e) Percibir una remuneración justa por sus tareas y capacitación, que no podrá ser menor al salario mínimo, vital y móvil y a otros conceptos.

f) El cuidado de la salud y la prevención de enfermedades laborales.

g) Desarrollar su trabajo en edificios cuyas instalaciones se ajusten a las normas de seguridad y salubridad y disponer del equipamiento y los recursos didácticos necesarios.

h) Al acceso a beneficios extraordinarios cuando los servicios se presten en establecimientos de zonas desfavorables o aisladas.

i) A los beneficios de la seguridad social; jubilación, seguros y obra social.

j) A pertenecer a organizaciones sindicales legalmente reconocidas.

ARTÍCULO 61: Serán deberes de los docentes:

a) Su formación, perfeccionamiento y actualización permanente.

b) Respetar las normas institucionales de la comunidad educativa que integran.

c) Colaborar solidariamente en las actividades de la comunidad educativa.

d) Orientar su actuación en función del respeto a la libertad y dignidad del alumno como persona.

e) Afianzar el sentido de la responsabilidad en el ejercicio de la docencia y el respeto por la tarea educativa.

f) Comprometerse a no interrumpir el ejercicio de su profesión salvo en casos excepcionales de fuerza mayor.

g) Informar los resultados de su tarea.

h) Rendir las evaluaciones establecidas en el título siguiente.

ARTÍCULO 62: Los objetivos de la formación docente son:

a) Preparar y capacitar a los docentes para un eficaz desempeño en cada uno de los niveles y modalidades del sistema educativo.

b) Preparar y capacitar a los docentes para un eficaz desempeño en la detección, métodos de enseñanza, contención e integración de los alumnos con necesidades educativas especiales.

c) Formar al docente como agente activo de participación en el sistema representativo republicano federal.

d) Perfeccionar con criterio permanente a graduados y docentes en aspectos científicos, metodológicos, artísticos y culturales.

e) Considerar a la capacitación docente como criterio rector para ascender en la carrera profesional

f) Preparar a los docentes para desempeñar los cargos de dirección y conducción de las escuelas, con el objeto de lograr la optimización en la utilización de los recursos destinados a la educación.

TÍTULO IX

De la Evaluación de la Educación

Capítulo I

Convenio de Equivalencia de la Enseñanza - Evaluación

ARTICULO 63: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán garantizar una estructura básica común, equiparable y uniforme de la escolaridad obligatoria en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales en lo referente a las formas de organización y revisión de exámenes mediante la aplicación de los instrumentos que emanen del Convenio de Equivalencia de la Enseñanza y de las normas y resoluciones dictadas por la autoridad competente.

ARTÍCULO 64: El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, suscribirán un Convenio de Equivalencia de la Enseñanza por el cual se establecerán:

a. Los objetivos y contenidos básicos comunes a la currícula de los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales del sistema educativo.

b. Los estándares de comprensión en lectura y escritura correspondientes a cada ciclo, nivel y régimen especial del sistema educativo.

c. Los contenidos actualizados en las asignaturas lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales.

d. Las exigencias mínimas de lectura de obras literarias correspondientes a cada ciclo, nivel y régimen especial.

e. Las pautas básicas comunes de organización de los ciclos, niveles y regímenes especiales que integren la estructura del sistema educativo, a fin de facilitar el pasaje y continuidad entre jurisdicciones, y asegurar la movilidad horizontal y vertical de los educandos.

f. El sistema de evaluación jurisdiccional.

g. Los contenidos y objetivos básicos comunes de la Formación Profesional Docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse como docente en cada ciclo, nivel y régimen especial.

h. Los parámetros de evaluación de la calidad de la formación docente.

ARTICULO 65: Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires evaluarán sistemática y periódicamente el cumplimiento del Convenio de Equivalencia de la Enseñanza y demás normas complementarias, el funcionamiento de la organización del sistema educativo en el ámbito de su competencias, y remitirán anualmente la información desagregada a la Agencia Federal de Evaluación de la Educación.

ARTÍCULO 66: Cada unidad escolar realizará anualmente una autoevaluación institucional de procesos y de resultados cuantitativos y cualitativos, y la dará a conocer a su comunidad educativa. El único propósito de dicha auto evaluación es generar estrategias de mejora de sus propias prácticas.

ARTÍCULO 67: La evaluación que realizará el Sistema Educativo en su conjunto, observará distintos tratamientos conforme el alumno avance en su posición relativa dentro del

sistema. Por vía reglamentaria se proveerá una metodología de evaluación que permitirá percibir el progreso y las carencias individuales de los alumnos en las distintas asignaturas. Para ello el Sistema Educativo deberá adoptar distintas exigencias de enseñanza según el ciclo, nivel y/o régimen especial estableciendo con objetividad sus fases de promoción, observación y orientación.

El aprendizaje debe efectuarse en las siguientes áreas del conocimiento: lengua castellana, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, una segunda lengua y una asignatura de formación para la postulación laboral.

ARTICULO 68: La Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, teniendo en cuenta las características locales, elaborará evaluaciones similares a las pruebas internacionales de calidad educativa, tales como PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), PISA (Program for International Student Assessment) y TIMSS (Third International Mathematics and Science Study), y dispondrá su ejecución homologada en todo el territorio nacional, a fin de poder hacer análisis comparativos con otros países, aspirando a conseguir para nuestros educandos el perfeccionamiento del sistema educativo acorde con los máximos niveles internacionales.

Capítulo II

Auditoría Federal de Evaluación Educativa

ARTÍCULO 69: Créase la Auditoría Federal de Evaluación Educativa (AFEE), órgano de auditoría externa de evaluación de la calidad de la enseñanza impartida dentro del sistema. La misma gozará de autonomía funcional y autarquía financiera, y se regirá por las disposiciones de la presente ley.

ARTÍCULO 70: La AFEE proveerá información cualitativa y cuantitativa a la autoridad competente quien la utilizara como herramienta para concretar el principio de equidad.

La evaluación de la calidad en el sistema educativo verificará el nivel de aprendizaje de los alumnos, y la calidad de la formación docente en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales.

ARTÍCULO 71: La AFEE será la encargada de recibir, emitir y organizar la información del sistema educativo a fin de elaborar la base de datos estadísticos. La misma deberá contener:

a) El presupuesto educativo asignado por cada jurisdicción, desagregado a nivel de unidades escolares en todos sus componentes.

b) Datos de las Unidades Escolares, desagregando cantidad de alumnos, docentes, personal administrativo y auxiliar, insumos, equipamientos y obras.

c) Los resultados cuantitativos y cualitativos resultantes de las evaluaciones educativas efectuadas por las jurisdicciones, las que deberán presentarse desagregadas por alumno, nivel cursado, establecimiento y distrito.

d) La información complementaria que permita identificar factores determinantes de los rendimientos escolares: conformación de los hogares de los alumnos y su nivel económico social; nivel de educación de los padres, antecedentes escolares de los alumnos; formación de los docentes y directores de las unidades escolares; y condiciones de los establecimientos.

e) Información cuantitativa y cualitativa de los resultados de la participación nacional en pruebas internacionales.

f) Información sobre la aplicación de los fondos establecidos en la ley 26.075.

g) Sanciones por incumplimiento de las disposiciones de la ley 26.075

ARTÍCULO 72: La AFEE será conducida por un Director Ejecutivo que tendrá dedicación exclusiva en sus tareas y durará cinco años en su cargo. Su remuneración será equivalente al cargo de Secretario de Estado. Deberá reunir los siguientes requisitos:

1. Poseer título universitario de grado.

2. Poseer antecedentes técnicos y profesionales en la materia;

El Poder Ejecutivo cubrirá el cargo mediante concurso público abierto de antecedentes y oposición, debiendo publicar las fechas de exámenes y condiciones generales por cinco días en el Boletín Oficial, dos diarios de alcance nacional, y un diario de cada provincia;

ARTICULO 73: El Director de la AFEE contará con el asesoramiento de un Consejo Consultivo de siete miembros integrado por: dos (2) representantes de la Academia Nacional de Educación, un (1) representante del Consejo

Federal de Educación, un (1) representante de cada Cámara del Congreso Nacional, uno (1) por el sector gremial y uno (1) por el sector educativo.

ARTÍCULO 74: Es competencia de la AFEE:

1. Recibir y solicitar la información establecida en el artículo 60 de la presente ley.

2. Requerir informes, documentos, antecedentes y todo elemento complementario que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a cualquiera de las jurisdicciones del sistema.

3. Disponer y dirigir encuestas y evaluaciones, y efectuar el análisis de la información del inciso primero, publicando los resultados en los medios masivos de comunicación.

4. Denunciar los casos de incumplimiento de los deberes de informar establecidos en la presente ley.

5. Celebrar acuerdos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros para intercambiar información.

ARTÍCULO 75: El Director ejecutivo de la AFEE estará sujeto a las siguientes obligaciones:

1. Presentar una rendición anual de su gestión al H. Congreso de la Nación.

2. Comparecer ante las comisiones del H. Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y remitir la información que éstas le soliciten.

3. Garantizar el libre acceso a la información colectada.

TÍTULO X

Gobierno y Administración

ARTÍCULO 76: El gobierno y administración del sistema educativo asegurará el efectivo cumplimiento de los principios y objetivos establecidos en esta ley, teniendo en cuenta los criterios de identidad nacional, democratización, descentralización, federalismo, equidad, intersectorialidad, articulación, transformación e innovación.

Capítulo I

Del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación

ARTÍCULO 77: El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, deberá:

a) Cumplir con los derechos, principios y objetivos del Sistema Federal de Educación.

b) Dictar, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, normas generales sobre equivalencia de títulos y de estudios.

c) Promover programas especiales para garantizar el ingreso y permanencia de los alumnos de todos los ciclos y niveles del sistema educativo federal, en cumplimiento de las resoluciones del Consejo Federal de Educación.

d) Ejecutar el Convenio de Equivalencia de la Enseñanza, para lo cual establecerá, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales de enseñanza, que faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos. En todos los casos existirá un espacio curricular para la inclusión de contenidos que respondan a los requerimientos provinciales, municipales, comunitarios y escolares que no obstará a esa movilidad.

e) Definir, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, las estructuras curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios para todas las jurisdicciones y, para todos los ciclos, niveles y regímenes especiales de la escolaridad obligatoria.

f) Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, mecanismos de renovación periódica total o parcial de los contenidos curriculares comunes.

g) Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, los contenidos y objetivos básicos comunes de la Formación Profesional Docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse como docente en cada ciclo, nivel y régimen especial, emitir los certificados de capacitación correspondientes y organizar una red de formación, perfeccionamiento y actualización del personal docente y no docente del sistema educativo.

h) Diseñar un sistema de evaluación y control periódico de la calidad, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, para lo que utilizará, entre otras, la información recabada y analizada por la Agencia Federal de Evaluación Educativa.

i) Evaluar el funcionamiento del sistema educativo en todas las jurisdicciones ciclos, niveles y regímenes especiales, a partir del diseño de un sistema de evaluación y

control periódico de la calidad, aprobado por resolución del Consejo Federal de Educación, y utilizando la información recabada y analizada por la AFEE.

j) Asignar las partidas de créditos presupuestarios necesarios para afrontar las evaluaciones educativas nacionales y la participación nacional en certámenes internacionales.

k) Aplicar el sistema de premios y sanciones a las jurisdicciones según el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos asumidos en los acuerdos federales suscriptos.

l) Desarrollar programas federales de cooperación técnica y financiera a fin de promover la calidad educativa y alcanzar logros equivalentes, a partir de las heterogeneidades locales, provinciales y regionales.

m) Coordinar y ejecutar programas de investigación y cooperación con universidades y organismos especializados.

n) Administrar los servicios educativos propios y los de apoyo y asistencia técnica al sistema -entre ellos, los de planeamiento y control; evaluación de calidad; estadística, investigación información y documentación; educación a distancia, informática, tecnología, educación satelital, radio y televisión educativas- en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, y en coordinación con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

o) Alentar el uso de los medios de comunicación social para la difusión de programas educativo-culturales que contribuyan a la afirmación de la identidad regional y nacional.

p) Entregar anualmente los informes con los resultados de dichas evaluaciones a la AFEE.

q) Dictar las normas generales sobre revalidación de títulos y certificados de estudio desarrollados en el extranjero.

r) Coordinar y gestionar la cooperación técnica y financiera internacional, bilateral y multilateral, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación.

s) Elaborar una memoria anual donde consten los resultados de la evaluación del sistema educativo, la que será enviada al H. Congreso de la Nación.

Capítulo II

Del Consejo Federal de Educación

ARTÍCULO 78: El Consejo Federal de Educación es el ámbito de coordinación y concertación del Sistema Federal de Educación y está presidido por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, e integrado por los responsables de la conducción educativa de cada jurisdicción y los representantes del Consejo de Universidades.

ARTÍCULO 79: La misión del Consejo Federal de Educación es unificar criterios entre las jurisdicciones con el objetivo de garantizar a todos los habitantes del país el derecho constitucional de enseñar y aprender en forma equivalente y equitativa.

ARTÍCULO 80: Para cumplir con su misión, el Consejo Federal de Educación deberá:

a) Concertar dentro de los lineamientos de la política educativa federal los contenidos básicos comunes, los diseños curriculares, las modalidades y las formas de evaluación de los ciclos, niveles y regímenes especiales que componen el sistema educativo.

b) Acordar los mecanismos de reconocimiento y equivalencia de estudios, certificados y títulos de la educación formal y no formal entre las distintas jurisdicciones.

c) Acordar los contenidos básicos comunes de la formación profesional docente y las acreditaciones necesarias para desempeñarse en cada ciclo, nivel y régimen especial de las diferentes jurisdicciones.

d) Acordar las exigencias pedagógicas que se requerirán para el ejercicio de la función docente en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales del sistema educativo.

e) Promover y difundir proyectos, experiencias innovadoras y organizar el intercambio de funcionarios, especialistas y docentes mediante convenios que faciliten un efectivo aprovechamiento del potencial humano y de los recursos tecnológicos disponibles en el sistema educativo federal.

f) Garantizar la participación en el planeamiento educativo, de los padres, tutores o representantes, las organizaciones representativas de los docentes, y de las instituciones educativas de gestión privadas reconocidas oficialmente.

g) Acordar un sistema de premios y sanciones a las jurisdicciones, según el nivel de cumplimiento de las metas y objetivos asumidos en los acuerdos federales.

h) Cooperar en materia de legislación educativa, mantener vínculos con el Congreso Nacional y con las legislaturas provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ARTÍCULO 81: El Consejo Federal de Educación se compone de los siguientes órganos:

a) La Asamblea Federal, órgano superior del Consejo, estará presidida por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, e integrado por los ministros o responsables del área educativa de las provincias, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los representantes del Consejo de Universidades.

b) El Comité Ejecutivo, es el órgano operativo del Consejo. Desarrollará sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Federal. Estará presidido por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación e integrado por los miembros representantes de las tres regiones que lo componen, designados por la Asamblea Federal cada dos años. A tal efecto, se divide el territorio nacional en las regiones Norte, Centro y Sur.

c) La Secretaría General, conducirá y realizará las actividades y estudios según lo establezcan la Asamblea Federal y el Comité Ejecutivo. Su titular será designado cada dos años por la Asamblea Federal.

Artículo 82: El Consejo Federal de Educación contará con el apoyo de dos cuerpos consultivos, con voz y sin voto, cuyas opiniones y propuestas serán de carácter público:

a) El Consejo Económico Social, integrado por 2 (dos) representantes de las organizaciones empresariales de la producción y de los servicios, 2 (dos) representantes de la Confederación General del Trabajo y 2 (dos) representantes del Consejo de Universidades.

b) El Consejo Técnico Pedagógico, integrado por 2 (dos) representantes de la Academia Nacional de Educación, 2 (dos) especialistas designados por el Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Educación, un especialista designado por las organizaciones gremiales docentes con representación nacional mayoritaria, y un representante del sector educativo de gestión privada.

Capítulo III

De las Jurisdicciones

ARTÍCULO 83: Las autoridades competentes de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen las siguientes atribuciones:

a) Planificar, organizar y administrar el sistema educativo de su jurisdicción.

b) Organizar y conducir los establecimientos educativos de gestión estatal.

c) Reconocer y supervisar los establecimientos de gestión privada en su jurisdicción.

d) Auditar la aplicación de los aportes financieros estatales a la educación de gestión privada.

e) Auditar la asignación por alumno establecida en el artículo 52 de la presente ley.

f) Implementar las disposiciones del Convenio de Equivalencia de la Enseñanza para lo cual deberán aplicar el currículo de los diversos ciclos, niveles y regímenes especiales establecidos en las resoluciones del Consejo Federal de Educación.

g) Ejecutar las resoluciones del Consejo Federal de Educación respecto de los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales del sistema educativo.

h) Evaluar periódicamente el sistema educativo dentro del ámbito de su competencia.

i) Promover la participación de los miembros de la comunidad educativa y de las organizaciones gremiales docentes en el mejoramiento de la calidad de la educación con aportes técnico pedagógicos que perfeccionen la práctica educativa

TÍTULO XI

Deber de Informar

ARTÍCULO 84: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán informar trimestralmente y al finalizar el ejercicio en forma desagregada, la ejecución de la inversión programada. Deberán detallar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos previstos en los artículos 2, 3, 4, 5, 6 y 14 de la Ley nº 26.075 de Financiamiento del Sistema Educativo. En caso de incumplimiento de las metas acordadas, se aplicarán las sanciones establecidas en los artículos 17 y 18 de la citada norma.

Toda la información deberá ser suministrada al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y a la AFEE, y será de amplio acceso y difusión pública conforme lo establecido en el artículo 13 de la Ley nº 26.075.

ARTICULO 85: A partir de la información suministrada por la AFEE, el Estado federal contribuirá al financiamiento de los programas especiales de desarrollo educativo que encaren las jurisdicciones con la finalidad de solucionar emergencias educativas o para compensar desequilibrios educativos regionales. Los fondos necesarios serán asignados en el presupuesto siguiente a la presentación del programa, con todos los detalles que la reglamentación disponga, con sujeción a los límites establecidos en la Ley de responsabilidad fiscal nº 25.152.

TÍTULO XII

Disposiciones Transitorias y Complementarias

ARTÍCULO 86: A partir de la promulgación de la presente ley y en un plazo no mayor a un año, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordarán en el seno del Consejo Federal de Educación:

a) La articulación progresiva de una estructura básica común, equiparable y uniforme de la escolaridad obligatoria en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales.

b) El mecanismo de revisión y actualización de los contenidos básicos comunes actualizados del diseño curricular establecidos por el Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología y el Consejo Federal de Educación.

c) Los instrumentos jurídicos que integren el Convenio de Equivalencia de la Enseñanza y demás normas complementarias.

d) Las características y modalidades de los operativos de evaluación educativa nacional en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales del sistema.

e) Una norma general sobre equivalencia de títulos y de estudios, estableciendo la validez automática de los planes aprobados por resolución del Consejo Federal de Educación.

ARTICULO 87: Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abocarán a adecuar su legislación educativa en consonancia con la presente ley, y a diseñar e implementar sistemas administrativos de control, auditoría y

de evaluación, a efectos de facilitar su eficaz y eficiente ejecución.

En el plazo de tres años desde la sanción de esta ley, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán informar los resultados cuantitativos y cualitativos del sistema educativo y la inversión, desagregados por distrito, unidad escolar, curso y alumno.

En caso que los resultados exhiban una inversión insuficiente en escuelas a las que asisten los sectores sociales más desfavorecidos, deberán presentar programas correctivos y ponerlos en ejecución en el plazo máximo de un año, bajo apercibimiento de ser declarada la emergencia en el territorio de la jurisdicción involucrada.

ARTICULO 88: Los fondos que demande el funcionamiento de la AFEE serán provistos por el Poder Ejecutivo Nacional en una partida presupuestaria específica.

ARTÍCULO 89: A los efectos de esta ley, el concepto de Educación Primaria establecido el artículo 5 de la Constitución Nacional, deberá aplicarse a la totalidad del sistema educativo obligatorio. En tal sentido, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán asegurar la prestación del servicio educativo extendiéndolo a los trece años de escolaridad obligatoria.

ARTÍCULO 90: Derogase la Ley N° 24.195 y su Decreto reglamentario N° 943/84, y demás normas complementarias y aclaratorias.

ARTÍCULO 91: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.- Ricardo A. Bussi.-

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El gobierno ha planteado la necesidad de modificar la Ley Federal de Educación haciéndose eco de ciertos cuestionamientos, los que incluso nosotros, desde este ámbito hemos comunicado en reiteradas oportunidades. La realidad nos demuestra que es necesario realizar cambios en el sistema educativo, no obstante, muchos de los motivos que impulsaron este proyecto fueron más ideológicos que prácticos. En este contexto nos encontramos que esa legítima necesidad, se ha transformado en una cruzada ideológica que bajo el pretexto de un “consenso general”, ha pretendido transformar el la discusión legislativa, en un mero

refrendo. Compartimos la idea de hacer las reformas necesarias para que la educación comience a funcionar nuevamente como el motor del desarrollo humano en la República, pero de una forma más democrática.

No podemos aceptar que la función legislativa se reduzca a un mero refrendo, que en este espacio no puedan debatirse ideas y que prime la ciega complacencia política sobre la razón y el bien común. Consideramos que una reforma debe ser el producto de un debate democrático e inclusivo, tal como el que se desarrolló durante el Segundo Congreso Pedagógico Nacional.

En efecto, entre septiembre de 1984 y marzo de 1988 la sociedad argentina en su conjunto y la comunidad educativa en particular, se movilizaron en un encuentro sin precedentes por el nivel de participación, donde reflexionaron, debatieron y acordaron los derechos, principios y objetivos muchos de los cuales hoy constituyen el andamiaje jurídico y axiológico del sistema educativo argentino.

Muchas de esas conclusiones se plasmaron en el texto de la Ley Federal N° 24.195, norma que retoma la senda constitucional del federalismo educativo: competencias concertadas y concurrentes entre jurisdicciones; gratuidad, gestión y administración descentralizada de los servicios; y extensión de los niveles de la educación básica y obligatoria.

Educar al soberano es uno de los mandatos ineludibles de la república democrática y hoy como en tiempos de la organización nacional es uno de mayores desafíos incumplidos que debemos encarar; debemos desarrollar una comprensión universal de la problemática educativa e inducir la aplicación de una metodología de gestión más potente que los problemas derivados de la amplia agenda incumplida.

Reformar el sistema importa acometer y vencer las resistencias de intereses creados de todo tipo, y para eso necesitamos información que nos permita desarrollar el nivel de conciencia social respecto a la realidad de la educación argentina y sus consecuencias. Porque la educación recorre territorios, vincula pueblos e integra sociedades, proveyendo saber, libertad, verdad y moral, valores constitutivos del con el que nuestros padres fundadores cimentaron la república democrática. Porque de la homogeneidad didáctica, disciplinaria y curricular surgió el sistema educativo como vínculo significativo de equiparación de nuestros hombres y mujeres haciéndolos iguales ante la ley y la Nación. Ese proyecto de educación popular decimonónica, fue el que convirtió una conflictiva federación provincial en un Estado moderno.

En primer término para concretar la reforma y alcanzar las metas y objetivos establecidos se requiere información fehaciente sobre los resultados de su aplicación para poder fortalecer los logros, corregir los desvíos y actualizar conceptos, pero preservando los consensos oportunamente alcanzados, y éste es justamente el móvil que nos impulsa a presentar un dictamen de minoría respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, porque necesitamos una ley que efectivamente proponga y enmarque una mejor educación.

La degradación del sistema educativo argentino es evidente para todos aquellos que recorren las escuelas de la patria y observan el fracaso del objetivo transformador fundacional de la educación sarmientina. Este sistema es regresivo, porque los sectores más pobres y postergados concurren a las escuelas de peor calidad y ello implica falta de compromiso por la educación popular y en una república democrática el sistema educativo debe ser la vía de ascenso social.

Nuestro desafío de la hora hace insoslayable devolver al sistema esta virtualidad como exigencia de equidad y reconstitución de nuestro tejido social, y en tal convicción, proponemos universalizar la educación desde el nivel inicial hasta completar los estudios secundarios y extender la jornada horaria de la educación primaria para que todos los niños y jóvenes, independientemente del lugar del país en que vivan, puedan aprender una segunda lengua y acceder al conocimiento de las nuevas tecnologías.

Debemos y podemos convertir a la educación en el instrumento que materialice la esperanza de construir una nación más sabia, más equitativa y adaptada a la sociedad global del conocimiento. Concretar esa esperanza depende de que se encare con vigor y resolución una revolución educativa comparable a la desarrollada por Domingo Faustino Sarmiento, Onésimo Leguizamón y la generación del 80. Aquella revolución, sorteó condicionamientos económicos, geográficos, docentes y permitió dar prioridad real a la educación, convirtiéndola en el signo distintivo de la sociedad argentina y artífice del progreso económico y social de la época. Fue a partir de ese proyecto político que se consolidó el país abierto a todos los hombres de buena voluntad, en el cual el carril de ascenso y progreso encontraba su base en una exigente y prestigiosa escuela pública.

El artículo 5º de la Constitución histórica de 1853/60 otorgó competencia provincial a la prestación de la educación primaria y pocos años después frente a la urgencia de la alfabetización general se autorizó al Estado

federal a acudir en auxilio a solicitud de los estados provinciales. En 1905 la Ley Láinez otorgó un impulso decisivo a la escolarización general de nuestro pueblo. En 1961 con la sanción de la ley nº 15.796 comienzo un proceso que culmina en 1978 y 1992 con la transferencia de las escuelas nacionales a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Así las cosas, el sector educativo también estuvo sujeto a los movimientos pendular de centralización y descentralización de los diferentes períodos históricos del federalismo argentino que expresan lo incompleto, errático y cíclico de nuestras políticas públicas. El circuito paralelo de escuelas nacionales y provinciales creado por la Ley Láinez, cambió radicalmente en los últimos doce años, con el encumbramiento de una nueva racionalidad política: primero se finalizó con la transferencia de escuelas medias y luego se sancionó el marco legal de la Ley Federal de Educación nº 24.195.

Sostener que en la transferencia de los servicios educativos y en la fragmentación del sistema está el origen del fracaso escolar es, al menos, un argumento reduccionista. El deterioro de la educación argentina es un largo proceso de décadas. El proceso de federalización de la educación enmarcado en la Ley de Transferencia nº 24.049 permitió simplificar la administración de todas las escuelas dentro del territorio provincial, dotar de coherencia y mayor potencial a la planificación unificada, al tiempo que otorgó complejidad administrativa a un sistema que mantuvo la lógica de funcionamiento dependiente del subsidio federal. Por su parte el Estado nacional, desvinculado de la administración directa de las escuelas se reservó para sí la configuración y regulación de la política educativa así como la supervisión de su implementación en las jurisdicciones.

La solución nos reclama abandonar las energías aplicadas a los análisis históricos ideológicos y volcar los esfuerzos en revertir resultados insatisfactorios y así enfrentar el fracaso, generando una educación inclusiva y de calidad para todos los sectores, en especial los más vulnerables y postergados. Necesitamos información sobre los resultados de la aplicación del plexo normativo vigente porque análisis fundacionales e ideológicos no pueden inducir cambios estructurales en política pública alguna.

En primer término, toda política educativa debe partir del respeto irrestricto a la libertad de enseñanza, valor esencial que se fundamenta en el derecho constitucional de enseñar y aprender, y en el derecho inalienable de los padres a decidir en los asuntos relativos a la educación de

sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones éticas, morales, filosóficas y religiosas. En nuestro concepto la libertad de enseñanza es un valor fundamental, reflejo primario del derecho natural de los padres a la educación de sus hijos. Ello nos lleva a aceptar la contribución de la educación pública de gestión privada en el desarrollo y enriquecimiento de la educación argentina a lo largo de toda nuestra historia.

Recrear la educación argentina sobre las bases de una ética y una moral en valores excede la responsabilidad del sistema educativo y debe ser un compromiso de la sociedad en su conjunto. Este compromiso abarca la familia, la política, las organizaciones civiles y religiosas, los medios de comunicación social y la escuela, la cual deberá tomar a su cargo una formación que haga hincapié en la educación personal, espiritual, cívica y social de los alumnos.

En todos los niveles la educación debe tener el cometido esencial de la promoción del desarrollo integral de los alumnos donde puedan actuar como seres con pensamiento crítico y equilibrados, respetuosos de sí mismos, de su dignidad y la de los demás, formados en los valores de la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, el amor a la patria, el respeto a nuestras tradiciones, y una ética y una cultura coherente con la cooperación mutua, la organización democrática y la solución pacífica de los conflictos.

Por su parte, en toda nuestra historia no ha sido menor el aporte de la educación pública de gestión privada, cuya contribución ya era reconocida por Domingo F. Sarmiento cuando nos enseñaba que "la fe y las religiones autorizadas son el aliado natural del buen gobierno, ellas subsidian al Estado en materia de educación, prestan servicios de inmejorable calidad y señalan con sabiduría los escollos en el camino hacia el bien común. Educación para pensar y decidir en libertad, educación para trabajar y desarrollar a la Nación, porque el saber es riqueza y un pueblo ignorante es pobre y sometido". En virtud de esta convicción reafirmamos la necesidad de continuar y ampliar realizando los aportes financieros que permitan su sostenimiento.

En igual sentido la familia es reconocida como agente natural y primario de la educación de sus hijos, en los tratados internacionales suscriptos por nuestro país como la "Declaración Universal de Derechos Humanos", la cual establece en su artículo 26 inciso 3 que "los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos", y la "Convención Americana de Derechos Humanos" (Pacto San José de Costa Rica), que

aún más explícitamente en el artículo 12 inciso 4, dispone que: "Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Los derechos de los padres en esta materia no son, pues, los derechos de terceros que vienen a interferir en la relación entre el alumno y el Estado o el sistema escolar, como alguna vez se ha pretendido, sino los propios derechos del alumno, ejercidos por aquellos a quienes la naturaleza y las leyes confían su representación, protección y educación.

Asimismo al elegir estudios y escuelas para sus hijos los padres no declinan ni transfieren la patria potestad, tienen también derecho a ser informados, consultados y escuchados acerca del desempeño y comportamiento escolar de sus hijos. En otras palabras tienen derecho a ser considerados miembros de la comunidad educativa, aspecto muchas veces descuidado en la organización escolar, sobre todo cuando el alto número de alumnos y docentes de un establecimiento se convierte en factor de masificación.

En segundo término, debemos aceptar que todos estos postulados serán meras expresiones de deseos si no sujetamos la educación a metas exigentes: estándares curriculares demandantes, indicadores representativos y exámenes externos. Urge reinstalar la cultura de la responsabilidad, donde nos hagamos cargo del proceso y el resultado. El análisis intelectualmente honesto indica que no todo gasto vinculado a la educación es una inversión y, su relación con los resultados cuantitativos -como la graduación- o los cualitativos -como los puntajes y las pruebas de calidad-, otorgan señales que deben ser científicamente analizadas. Los resultados de la educación nacional son opacos y en tal opacidad se esconden y ocultan las abismales diferencias geográficas, económicas y sociales que replican las inequidades estructurales de la sociedad argentina actual.

Los sectores que propician el cambio mágico, producto del aumento de los recursos o las modificaciones legales, como aquellos que consideran que la sola eficacia en la aplicación de los recursos alcanza, convergen en un empate conservador, en el cual algo cambia para que nada cambie y el concepto de equidad se pierde en el laberinto del discurso electoral

Para revertir sin dilaciones esta realidad nosotros proponemos que el Estado Federal implemente una asignación por alumno con el objetivo de garantizar a todos los niños y adolescentes el cumplimiento de la obligatoriedad dispuesta en la ley. Esta asignación consistirá en un ingreso

mensual que cubrirá las necesidades elementales para mantener la condición de alumno regular de los niños y adolescentes de los sectores sociales más desfavorecidos que cursen la escolaridad básica y obligatoria. El ingreso será solicitado y percibido por los padres, tutores o curadores, contra la presentación de la libreta escolar que certifique la asistencia regular de los alumnos a clase.

Es imperioso introducirnos sistemáticamente en la pruebas de calidad y desagregar la información por escuela y por alumno. La Ley Federal de Educación fue ambiciosa e innovadora pero burocrática, disponía el aumento anual del 20% en el gasto del sector hasta llegar al 6% del PBI. Antes bien, sin alcanzar las metas propuestas debido a la crisis de las finanzas públicas, la inversión destinada a la reforma educativa fue importantísima; sin embargo al estar todo el énfasis puesto en los recursos económicos, la ley no logró operar como marco regulador del sistema. A esto debe sumarse que todos los conflictos en torno a los recursos de la educación se agudizan por la falta total de transparencia del sistema educativo. Las estimaciones expresan que la burocracia del sistema insume más del 40% de los recursos asignados al sector. Sólo existen estimaciones porque se trata del secreto de estado mejor guardado: ningún distrito ni aún los más desarrollados y privilegiados como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires poseen estadísticas y datos fehacientes de su gasto educativo y de cuanto llega efectivamente a la escuela, al aula y al alumno.

Desde nuestra perspectiva la inclusión tiene un sentido amplio, abarcador de todos los sectores, por ello formulamos un régimen de educación para las personas con necesidades especiales, -es decir, aquellas con discapacidad o talentos superiores-, quienes deben recibir una formación que permita el pleno desarrollo de sus capacidades, habilidades, potencialidades y una correcta inserción en el medio social. Por primera vez avanzamos hacia un tratamiento completo, integral e inclusivo de los educandos con necesidades especiales. Integral porque no se limita al universo clásico de necesidad especial, sino que incluye a los talentosos, porque el talento no es patrimonio de los sectores favorecidos. Un talentoso pobre es aún más discriminado si el Estado no facilita su correcta inserción y desarrollo de sus potencialidades.

La escolaridad rural también debe tener un tratamiento particular, que esté orientado a satisfacer requerimientos educativos propios del medio y estimular el desarrollo dentro de su propia comunidad. Los países que cuentan con procesos de crecimiento sostenido y calidad de vida de su población son aquellos que valoran y preservan su tejido

social, por eso la educación rural debe proveer las herramientas de formación que eviten el desarraigo de los niños y jóvenes en búsqueda de calidad educativa y posibilidades de progreso personal fuera de su pueblo o provincia. El Estado debe poner énfasis en el desarrollo de políticas que preserven el arraigo y el desarrollo de todas las áreas del país. La posibilidad de desarrollar la vida en el lugar de origen, cerca de los afectos familiares y las tradiciones es un derecho inalienable de los pueblos, que debe ser garantizado por el Estado mediante la implementación de políticas sustentables.

Es tiempo que el centro del sistema educativo vuelva a ser el alumno y no las jurisdicciones estatales, las autoridades burocráticas o los sindicatos docentes. Solucionar los problemas de la educación argentina exige partir de un dato empírico confiable sobre el cual realizar el diagnóstico pertinente. Sin información no hay cambio posible, por ello impulsamos la creación de la Auditoría Federal de Evaluación Educativa, cuya función principal será proveer información cualitativa y cuantitativa destinada a ser utilizada por la autoridad competente como herramienta para concretar el principio de equidad. Es una tarea pendiente la formulación de un Convenio Básico entre el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que garantice una estructura básica común, equiparable y uniforme de la escolaridad obligatoria en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales en lo referente a las formas de organización y revisión de exámenes.

En tercer término, proponemos un viraje sustancial en materia de financiamiento, avanzando hacia la determinación de la inversión educativa por escuela y por alumno. Tal afirmación importa reconocer que la educación de gestión estatal o privada no es gratuita para los ciudadanos, sino el resultado del esfuerzo de los contribuyentes y el Estado debe asumir el financiamiento de la educación de manera responsable.

Los países que adoptan la democracia y el sistema republicano de gobierno sostienen el principio de igualdad de oportunidades para los individuos que componen la sociedad como un medio de mitigar el funcionamiento del sistema capitalista. La constante evolución social genera necesidades que se traducirán en nuevas demandas que, frente a los recursos limitados, deben solucionarse en un riguroso orden de prioridades para mantener el presupuesto público dentro de un equilibrio razonable de gastos con impuestos, por ello los objetivos de esta ley necesariamente

se deben articular con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.152.

En virtud de tal apreciación en el presente proyecto de ley establecemos medidas operativas que contribuyen a mejorar la eficacia en el uso de los recursos destinados a la educación. En primer lugar proponemos incluir una disposición reglamentaria del artículo 5 de nuestra ley fundamental, por la cual se considerará cumplida la disposición constitucional cuando la jurisdicción afecte al área educativa como mínimo el 20% de su presupuesto público. Este compromiso, sumado al esfuerzo del Estado federal de garantizar la asignación por alumno para cumplir con la imposición de asistir a clase durante la escolaridad obligatoria, no admite la posibilidad de despilfarros o errores de gestión, ya que no se puede sostener un sistema de prestaciones básicas con endeudamiento y se debe respetar al contribuyente: los fondos públicos que se aplican para financiar la educación provienen del trabajo de los habitantes del país lo cual significa sacrificios para los ciudadanos.

Debemos formar ciudadanos y para ello propiciamos incorporar la enseñanza de las disposiciones de la Constitución Nacional como elemento indispensable y esencial de la educación, pues es alarmante el desconocimiento público sobre los principios, derechos y obligaciones contenidas en nuestra ley fundamental. Es imperativo que nuestros niños y jóvenes entiendan que todos los derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás personas y así desarrollar una sólida formación republicana y un compromiso cívico. En materia de contenidos en el secundario, se agrega el conocimiento del funcionamiento de la iniciativa económica y de la organización empresarial, para dotar a los alumnos de herramientas para comprender y desenvolverse en la vida productiva.

Finalmente, entendemos que la prolongación de la crisis argentina se manifiesta en la fragmentación social y política que padecemos; así la enorme brecha social y la falta de credibilidad en las instituciones ha separado a la sociedad civil de la política. Es urgente recuperar la tarea política en su dimensión más comprometida y aceptar el desafío de sentar las bases de una política de estado educativa que supere la ausencia de programas y objetivos de largo plazo y trabaje con ahínco para dejar atrás la coyuntura, el parche y la solución superficial, mediática y espúreamente negociada.

En más de setenta años la Argentina no ha logrado desarrollar y menos aún implementar políticas públicas en las diferentes áreas del Estado que no se hayan visto truncadas por diferentes causas. A esta situación llegamos por la falta de consenso, el desprecio por las instituciones republicanas, los proyectos hegemónicos y nuestros propios desencuentros. Debemos dirigir la mirada hacia el futuro, al próximo bicentenario, y recuperar el impulso de los pioneros para atender en forma urgente a las tareas pendientes en Educación: escolaridad universal obligatoria, calidad de la enseñanza en todos los niveles, profesionalización docente y el desapego de la sociedad por la educación.

En definitiva, es urgente recuperar la tarea política en su dimensión más comprometida y acordar las bases de una política de estado en materia educativa que supere la ausencia de programas y objetivos de largo plazo. Los países se desarrollan con proyectos que establezcan objetivos claros, mensurables y sustentables en el tiempo. En esta materia el cambio debe alcanzar a los fines de la educación, a sus contenidos y a sus medios, debe comprometer a la nación y a las provincias, a todos los niveles de enseñanza, a los gobernantes y la sociedad en su conjunto y por encima de todo a la familia.

El cambio es políticamente factible y es la gran esperanza para dar solución y construcción a una sociedad socialmente más integrada, equitativa y justa.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del H. Senado de la Nación, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.

SALA DE COMISIONES, 30 de noviembre de 2006.

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.- Ricardo A. Bussi.-